



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: MARTHA ANDREA SANÍN BELTRÁN
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 019 2019 00294 01
Sentencia: S-164

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de noviembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARTHA ANDREA SANÍN BELTRÁN demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la ley 797 de 2003, junto con los intereses moratorios y la indexación de las condenas, así como los perjuicios materiales causados por PROTECCIÓN S.A. y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 5 de noviembre de 1959; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 1 de febrero de 1981, acumulando un total de 628.57 semanas de cotización; que el 22 de febrero de 1996 se trasladó al RAIS a través de la AFP COLMENA S.A.; que en esa entidad tiene cotizadas 1143 semanas de cotización, para un total en toda su vida laboral de 1791 semanas; que al momento del traslado de régimen pensional, no le indicaron el saldo o la edad que necesitaría para acceder a la pensión de vejez, ni le indicaron las ventajas y desventajas de esa decisión; que fue inducida en error ya que la AFP no le suministró una información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta con respecto a las consecuencias legales y económicas que tendría su traslado de régimen pensional; y que una proyección de su situación pensional muestra como en el RAIS tendría la garantía de pensión mínima, mientras que en COLPENSIONES podría alcanzar una mesada pensional de \$2`422.671.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta lo relacionado con la afiliación de la demandante a esa entidad, el total de cotización que alcanzó a completar y el posterior traslado al RAIS a través de la AFP COLMENA. Frente a los demás hechos, indica que no le constan por tratarse de afirmaciones frente a un tercero ajeno a su entorno y por ende deben ser probadas dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones en tanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al RAIS, además de que ya perdió la posibilidad de retornar en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la ley 797 de 2003. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir la ineficacia o nulidad de traslado, ausencia de prueba de engaño y perjuicios padecidos, improcedencia de la indexación de las condenas, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez e intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. por su parte, acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su afiliación al RAIS a través de la AFP COLMENA el 22 de febrero de 1996. Niega los demás hechos de la demanda indicando que los asesores de esa entidad son permanentemente capacitados a fin que puedan suministrar toda la información y asesoría completa y necesaria a sus clientes o potenciales clientes, lo que concretamente ocurrió con la demandante, a quien se le suministró una debida y completa asesoría y se le explicaron las consecuencias y efectos del traslado de régimen. Se opuso a las pretensiones ya que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción e inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y el seguro previsional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2020, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A.; ii) ORDENÓ además a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES todos los valores recibidos con motivo de la afiliación, incluyendo los rendimientos financieros, salvo los valores destinados al pago de los seguros previsionales iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD, declarando el derecho a la pensión de vejez pero cuyo disfrute se condiciona al momento en que se acredite el retiro del sistema; iv) ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN de la pretensión de perjuicios materiales; y v) CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$877.803.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de apelación en cuanto a la orden de trasladar las cuotas de administración por tratarse de un descuento autorizado por la ley 100 en su artículo 20 en un porcentaje de 3% sobre los aportes realizados, el cual se usa para los gastos de administración y los seguros previsionales, aplicable tanto en el RAIS como en el RPM. Agrega que en el expediente se demuestran los rendimientos generados, lo que da cuenta de la adecuada administración, de manera que la condena de primera instancia se constituye en un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES y que de todas maneras opera la prescripción al haber transcurrido más de 3 años y no ser conceptos destinados a la financiación de la pensión. De otro lado, se aparta de la condena por concepto de aportes voluntarios, teniendo en cuenta que a esos fondos se puede afiliarse cualquier

persona, independiente del régimen pensional al que pertenezcan, lo que le puede generar distintos beneficios.

La apoderada de COLPENSIONES, por su parte, solicita revocar la sentencia de primera instancia y absolver a la entidad de todas las pretensiones formuladas en su contra, ya que el impacto monetario que acarrea el cambio de régimen en los afiliados, no puede ser la causa para la declaratoria de su ineficacia. La disparidad en cifras por el aspecto estructural del sistema no puede llevar a que prospere una demanda de nulidad o ineficacia. Advierte que la carga de la prueba no se puede trasladar de manera absoluta a los fondos de pensiones, al ser el formulario de afiliación un negocio jurídico que involucra el consentimiento de dos voluntades, ni se debe habilitar que el afiliado presente una actitud 100% pasiva respecto de los movimientos, rendimientos y utilidades de su dinero, sin que sea admisible que frente a un derecho como este, solo hasta 10 a 20 años después, se pretenda información al respecto. En caso de que se confirme la decisión, de conformidad con sentencias como la SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019 y SL 1688 de 2019, solicita se ordene el traslado de las cuotas de administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y los seguros para que se garantice el financiamiento de la pensión, en tanto no es posible que tales conceptos se compensen con los rendimientos causados.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, el apoderado de COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión indicando que no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de

defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Constitución Política, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga. Sostiene que la afiliación efectuada por la demandante al RAIS goza de plena validez, pues en el momento en el que decidió trasladarse de régimen, estaba aceptando las condiciones pensionales allí establecidas y lo que se avizora es una inconformidad con la mesada pensional y por eso ahora alega una supuesta falta de información que en todo caso le incumbe a la parte que afirma demostrar los hechos que sustentan su demanda, lo cual se pudo verificar en el interrogatorio practicado que no fue así, por lo que concluye que no es posible, ni jurídicamente válido, acceder a las pretensiones del accionante por lo que se debe exonerar a COLPENSIONES de toda responsabilidad.

La parte demandante también hizo uso de dicha oportunidad legal, recordando que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el I.S.S. o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la ley 100 de trasladarse al RAIS, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse, pero en el presente caso la AFP no cumplió con su obligación de brindar la referida información. De otro lado, se ha indicado que el efecto de la ineficacia es retrotraer las cosas al estado inicial, es decir, al momento en que se firmó el contrato declarado hoy ineficaz, por lo que todos los fondos de pensiones deben responder por las cuotas de administración descontadas durante la época en la que la demandante estuvo en el fondo, tal y como se ha indicado en sentencias como la SL 2877 del 29 de julio de 2020, con radicación 78667.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de ésta última - en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora MARTHA ANDREA SANÍN BELTRÁN realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP queda en la obligación de trasladar. Igualmente, se examinará lo atinente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MARTHA ANDREA SANÍN BELTRÁN nació el 5 de noviembre de 1959 (fl. 33); **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 1 de febrero de 1981, acumulando en esa entidad un total de 628.57 semanas (f. 36); y **iii)** el 22 de febrero de 1996 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP COLMENA S.A., hoy AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliada y cotizando actualmente (f. 46).

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es la declaratoria de ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual ocurrido en el año 1996 cuando decidió afiliarse a la entonces AFP COLMENA S.A., alegando que en aquella época no le fue suministrada la información necesaria para adoptar una decisión de esas características. En consecuencia, solicita se declare ineficaz su traslado; se le permita retornar como afiliada a COLPENSIONES; y se

le reconozca la pensión de vejez por acreditar más de 57 años de edad y más de 1300 semanas de cotización.

1. Ineficacia de traslado.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y

aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes*

pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en

rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].”***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

2. Cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a la decisión del a quo de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y cuotas de administración, aunque exceptuando lo relacionado con los seguros previsionales, tema que se revisará según los recursos de apelación planteados por ambas

entidades, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFPs correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda no solo con el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y gastos de administración, sino todo lo recibido durante el tiempo que la señora MARTHA ANDREA SANÍN BELTRÁN estuvo vinculada a esa entidad, es decir, incluyendo además los porcentajes destinados a los seguros previsionales, sin que sea procedente declarar prescripción de ninguna clase en tanto no se dan las condiciones para tal consecuencia.

Sobre la imposibilidad de la devolución de aportes voluntarios, la Sala advierte que nada en ese sentido se ordenó en la sentencia de

primera instancia, por lo que ningún pronunciamiento se hará al respecto.

3. Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, la demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido el 5 de noviembre de 1959, significa que los 57 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2016.

De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado por la demandada PROTECCIÓN S.A. a fls. 205 a 224, se evidencia que la actora acredita un total de 1194.43 semanas cotizadas a esa entidad, mientras que al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES había realizado aportes por 629.29 semanas, para un total de cotizaciones en toda su vida laboral de 1823.72, semanas que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez a la demandante conforme a lo establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 2003, se encuentra ajustada a derecho.

Ahora, en lo que tiene que ver con la liquidación y disfrute de la prestación, la Sala considera que la decisión adoptada en primera instancia también deberá ser confirmada debido a la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema. Incluso, el fundamento para adoptar esa decisión no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el

valor final de la prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que la propia demandante informó en su interrogatorio de parte, que en la actualidad continúa vinculada laboralmente, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, una vez reciba los dineros de la cuenta individual que el aquella posee en PROTECCIÓN S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación desde que se acredite el retiro del sistema.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día 5 de noviembre de 2020, pero la **MODIFICA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas de administración durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad, incluyendo los porcentajes de seguros y reaseguros y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso, tal y como había sido anunciado al momento de dar traslado para alegar.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 132
del 29 de julio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bca0fb921d39853d72e25280fdf18908b55e9dd735f61ce24ff3299e9aa866c9**

Documento generado en 28/07/2021 01:38:00 PM